

Una aproximación al fenómeno paramilitar en Colombia

Lic. Pável Alemán Benítez

A manera de presentación

El siguiente artículo, presenta un breve análisis de la historia del paramilitarismo en Colombia, sin el ánimo de construir una visión terminada. Solo presento mis puntos de vista sobre la formación de estos grupos y el papel hegemónico que han jugado las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) en la conformación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), principal ente paramilitar. Las AUC no solo interactúan con la realidad colombiana, sino que han ampliado su radio de acción a países fronterizos. Finalmente, comento el estado actual del proceso negociador de las AUC con el gobierno colombiano.

Breve pero necesaria historia

Para analizar la esencia del paramilitarismo colombiano hay que partir de la comprensión de que ha sido un fenómeno presente en la historia de ese país desde inicios del siglo XX. El asesinato a principios de ese siglo del general liberal Rafael Uribe Uribe, único congresista opuesto a la Constitución de 1886 y a la construcción de un estado autoritario de terratenientes propugnado por Rafael Núñez, fue realizado por sicarios que defendían a las oligarquías locales, regionales y nacionales interesadas “en proteger sus intereses y expandir su acumulación particular de riqueza”¹ a partir de la concentración de la propiedad de la tierra.

Al ser asesinado el líder progresista del Partido Liberal Jorge Eliécer Gaitán,² la represión al movimiento popular de protesta armada (primero urbana y luego rural) posterior al

¹ Gustavo Petro, *Indulto a paramilitares. Un nuevo encubrimiento para lavar unas relaciones incestuosas: las del Poder con la mafia y los crímenes contra la humanidad cometidos en Colombia*, InfoDpT-Colombia, 2 de diciembre de 2002, en <http://www.nodo50.org/derechosparatodos/Areas/AreaCOLOM-61.htm>

² El asesinato de Gaitán, el 9 de abril de 1948, aparece como punto culminante de una de las primeras operaciones de la CIA en el hemisferio occidental. Con la operación ‘Pantomima’, la CIA intentó a través del soborno y el chantaje, detener la creciente influencia de Gaitán, líder del ala izquierda del Partido Liberal y candidato a la presidencia de Colombia. Tras el fracaso de estos métodos, recurrieron a su asesinato como última alternativa. Esto se conoce por las confesiones del agente de la CIA John Mepples Espirito, capturado en Cuba cuando realizaba operaciones de inteligencia contra dicho país, en los años 60’

Bogotazo, fue realizada por la policía y el ejército con la ayuda de bandas de sicarios armados: los ‘pájaros’. El gobierno conservador se valió de estas bandas rurales, auténticos escuadrones de matones a sueldo, para apoyar a las fuerzas de seguridad estatales en el exterminio de la insurgencia liberal y comunista. Los ‘pájaros’ son por su *modus operandi* el referente natural de las actuales Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Auspiciados y protegidos por la policía, estos grupos paramilitares se dedicaron en extensas zonas agrarias a quemar poblados, realizar masacres y desplazar las poblaciones contrarias al Partido Conservador. De esta manera, las masacres cumplieron el doble rol de eliminar a la oposición política y “permitir que los hacendados conservadores ampliaran sus posesiones y controlasen la principal riqueza del momento: los cultivos de café”.³ Según estimados realizados por diversos autores, los asesinatos masivos de naturaleza política durante este período denominado “la violencia” (1948-1957) habrían alcanzado entre las 200 000 y las 300 000 víctimas.⁴

Ya en la década de los años 60’ del siglo XX y con el sostenimiento de focos de autodefensas campesinas (como la llamada República de Marquetalia) formadas por el Partido Comunista Colombiano, el estado colombiano comenzó a estructurar su propio modelo antisubversivo y funcional a la Doctrina de Seguridad Nacional norteamericana. En 1960, el Decreto 1705 creó el Consejo Superior de Defensa Nacional, integrado por el Ejecutivo, el Jefe del Estado Mayor Conjunto y el Comandante de las Fuerzas Armadas. La misión de este Consejo era la de definir los ‘enemigos’ de la seguridad nacional y los medios para eliminarlos o neutralizarlos.

En 1965 fue aprobado el Decreto 3398 (Estatuto Orgánico de la Defensa Nacional), que sería incorporado como norma permanente a la legislación nacional a través de la Ley 48 de 1968. Por medio de estas normas jurídicas fueron subordinados los cuerpos de

del siglo XX. Ver Colparticipar: *La Guerra Fría en Colombia: implicaciones de la CIA en los inicios de la Violencia*, en <http://www.ongscolombianas.net/gaitanismo/confesion.htm>

³ Gustavo Petro, Ob. cit.

⁴ El estimado es sostenido por: Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”-Comisión Andina de Juristas Seccional Colombiana (1994), Gustavo Petro (2002), Miguel Cruz Santos (2002, 1) y Richard L. Millett (2002, 3). Los autores difieren en el año en que finaliza este período y algunos lo sitúan en 1953 tomando como referencia la amnistía concedida por el dictador militar Gustavo Rojas Pinilla. Sin embargo, me parece más acertado situar esa fecha en 1957, año en que se pactó en España un Frente Nacional entre los jefes del bipartidismo tradicional (Liberal y Conservador) para alternarse en el poder. Otro argumento que refuerza este punto de vista es que posterior a la amnistía aceptada por las guerrillas liberales, fueron perseguidos y asesinados cerca de 16 000 combatientes liberales que habían depuesto las armas Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, 2002.

seguridad a las fuerzas armadas en la lucha contra los movimientos guerrilleros y se le dio un basamento legal a la promoción y organización de las autodefensas antiguerrilleras. A esos efectos, las fuerzas militares fueron facultadas para movilizar y organizar a civiles y dotarlos de armamento de uso privativo de las fuerzas militares. Esta forma de irregularizar la guerra por parte del estado colombiano quedó expuesta en diversos manuales de las fuerzas armadas colombianas:

...la junta de autodefensa es una organización de tipo militar que se hace con personal civil seleccionado de la zona de combate, que se entrena y equipa para desarrollar acciones contra grupos guerrilleros que aparezcan en el área o para operar en coordinación con tropas en acciones de combate (Reglamento de combate de contraguerrillas de 1969).

Organizarlas, instruirlas y apoyarlas debe ser un objetivo permanente de la Fuerza Militar... Las juntas de autodefensa proporcionan información. Niegan áreas al enemigo... (Manual de combate contra bandoleros o guerrilleros - Sin fecha).

La guerra de contrainsurgencia..., es aquella que lleva a cabo el gobierno... empleando acciones... militares y paramilitar contra las fuerzas insurgentes para prevenir o eliminar el proceso revolucionario y garantizar que no vuelva a presentarse (Reglamento de combate de contraguerrillas de 1987).⁵

Los paramilitares nacen amparados por las fuerzas armadas y han mantenido su vigencia porque son “un modo irregular de enfrentar a la guerrilla, que combina las operaciones encubiertas de sectores de la fuerza pública con la acción de armada grupos de autodefensa con base territorial”.⁶ Es decir, son útiles para operar sin las restricciones legales que imponen en todo conflicto, a las fuerzas combatientes (especialmente las fuerzas regulares de un estado), el respeto a los Derechos Humanos y al Derecho

⁵ AAJ, Pax Christi y otros: *El Terrorismo de Estado en Colombia*, Ediciones NCOS, Bruselas, 1992, pp. 13-14.

⁶ Paramilitarismo. Arma irregular contra la guerrilla, *El Tiempo*, Santa Fe de Bogotá, 17 de octubre de 1999, en <http://www.cip.fuhem.es/observatorio/indicadores/paises/colombia/informes/dominical7.htm>

Internacional Humanitario. El investigador Rainer Hule,⁷ precisa que de esta alianza nace el término paramilitar, pero que no es del todo claro el carácter de la relación entre militares y grupos armados extralegales de derecha. Coincido con él en que esta alianza depende en mayor o menor medida de los momentos y las regiones en que se desarrolle. Pero el carácter de dicha relación bidireccional me parece que está definido por objetivos comunes y una base ideológica afín: derrotar militarmente la oposición armada al estado y eliminar físicamente o neutralizar políticamente a los elementos o sectores contestatarios (organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, etnias indígenas o afrodescendientes, partidos o movimientos de izquierda, sindicatos de trabajadores y todo aquel cuya ideología o praxis política no sea funcional al sistema de dominación) contra las élites de poder del estado colombiano.

A inicios de los años 80' del mismo siglo, se gestó el paramilitarismo como consolidación de un proyecto anticomunista y latifundista. Aunque la experiencia piloto se había desarrollado previamente y desde fines de los 70' en Puerto Boyacá (departamento de Boyacá), para contrarrestar la presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), no fue hasta finales de 1981 en que el paramilitarismo tomó la forma de brazo armado de un proyecto político extremadamente reaccionario.

El 3 de diciembre de 1981 se hizo pública la formación del grupo paramilitar 'Muerte a Secuestradores' (MAS). Integrado por 223 narcotraficantes asociados al Cartel de Medellín, su fundación estuvo vinculada al secuestro por parte del insurgente M-19 de Martha Nieves Ochoa, hermana de dos de los sicarios de dicha organización mafiosa. El MAS además de contar con varios miembros del grupo de Pablo Escobar que se habían convertido en terratenientes, tenía el apoyo de los directivos de la Texas Oil Petroleum, los directorios locales de los partidos Conservador y Liberal y ganaderos de la región. Su entrenamiento se realizó en las fincas de estos terratenientes y ganaderos y en las instalaciones del batallón de infantería # 3 'Bárbula' del ejército colombiano.⁸

⁷ Rainer Huhle, "La violencia paramilitar en Colombia: Historia, estructuras, políticas del Estado e impacto político", *Revista del CESLA*, no. 2, Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Varsovia, Varsovia, 2001, p. 67.

⁸ AAJ, Pax Christi y otros: *El Terrorismo de Estado en Colombia*, Ediciones NCOS, Bruselas, 1992, p. 106 y 158.

El MAS tenía un componente ideológico, el movimiento ultraderechista Tradición, Familia y Propiedad; contaba con una fachada legal para sus reuniones y operativos encubiertos, la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio (ACDEGAM) y tuvo incluso de manera efímera su expresión partidaria a través del Movimiento de Restauración Nacional (MORENA). En el plano internacional, se cree que el MAS tuvo participación en el escándalo Irán-Contras o Irangate, como suministrador de cocaína para los negocios de la CIA. Posiblemente por esta vía, el MAS logró mejorar su capacidad de fuego y contratar a varios asesores israelíes, principalmente al ex coronel de los servicios de inteligencia Yair Klein, a finales de 1987 y principios de 1988.

Casi paralelamente al desarrollo del MAS, a mediados de los 80' se conformó al norte de los departamentos de Antioquia y Córdoba, un grupo homólogo que se volvería hegemónico dentro del paramilitarismo en los años 90': las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).

De manera similar, las ACCU surgieron motivadas por el deseo de venganza de los hermanos Fidel y Carlos Castaño Gil, tras el secuestro y ejecución de su padre, ganadero de Antioquia, por parte de las FARC. Fidel Castaño,⁹ líder de las ACCU hasta 1994 cuando falleció en Panamá, era conocido como 'Rambo'. Ambos hermanos tenían fuertes vínculos con el Cartel de Cali y poseían tierras en la zona del Urabá.

Para 1989, el asesinato por parte del MAS de varios candidatos a las elecciones presidenciales y las frecuentes matanzas provocadas por los militares contra la población no combatiente, provocó que el gobierno del presidente Virgilio Barco (1986-1990), dictara dos decretos contra el paramilitarismo. El Decreto 815 reafirmaba que "el poder único de formar grupos de 'autodefensa' recaía en el presidente, con la aprobación adicional de los ministerios de Defensa y Gobernación (ahora Interior)"¹⁰, mientras que el

⁹ Las causas de la muerte de Fidel Castaño nunca han sido esclarecidas. Quizás su deceso tenga relación con su indiscreta petición de que los paramilitares fueran reconocidos como interlocutores políticos de un proceso de paz, recordándole al gobierno que dichos "grupos fueron creados y entrenados en los cuarteles del ejército nacional, y utilizados como instrumentos de la lucha contrainsurgente". Jaime Zuluaga Nieto, "Entre la guerra y la paz", *Síntesis '95. Anuario Social, Político y Económico de Colombia*, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, Santa Fe de Bogotá, marzo de 1995, p. 108.

¹⁰ Patricia Barón y Sandra Mejía, *Aspectos del paramilitarismo colombiano*, Universidad Nacional de Colombia-Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, junio de 2001, p. 6. (mimeo).

Decreto 1194 establecía sanciones penales para civiles o militares que participaran en grupos paramilitares o ayudaran a los mismos.

Durante el gobierno del presidente César Gaviria (1990-1994), el Ministerio de Defensa de Colombia, previa sugerencia de un equipo de 14 especialistas norteamericanos (Comando Sur, CIA y Misión Militar norteamericana en Colombia), dictó la Orden 200-05/91. Esta orden militar promovía la creación de una extensa red de inteligencia militar cuya columna vertebral serían los propios paramilitares. Los ‘paras’,¹¹ se encargarían de recopilar la información necesaria para los operativos antisubversivos de las FF.AA. al tiempo que coordinarían sus acciones con las unidades militares. Es obvio pero necesario decir que esta orden violaba lo dispuesto por el Decreto 1194.

El pedido de extradición de los jefes del Cartel de Medellín por parte del gobierno norteamericano provocó la ruptura de la alianza que este sector de la mafia colombiana tenía con las fuerzas armadas. Los paramilitares de las ACCU, bajo la denominación de los “Pepes” (entre ellos los hermanos Castaño), se aliaron con la DEA (el departamento antidrogas norteamericano), el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad de la Presidencia, la policía política colombiana) y el Cartel de Cali, para combatir al Cartel de Medellín, logrando diezmarlo.

En 1994, la administración de Ernesto Samper (1994-1998), autorizó la creación de las asociaciones llamadas “Convivir”, legalmente llamados Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada, por el Decreto 356 de ese año. Estas corporaciones privadas de seguridad resultaron una manera de legalizar la existencia de los grupos paramilitares como pequeños ejércitos privados. No resulta casual que en los departamentos donde más se ha impulsado la creación de las Convivir (Antioquía, Cundinamarca y Santander) “la violencia en vez de disminuir ha crecido”.¹² En abril de 1997 existían 387 de estas asociaciones con más de 12 000 hombres sobre las armas.

Las Convivir tienen un importante papel en la contrarreforma agraria que realizan los narcotraficantes. Inicialmente, el ejército realiza operaciones de rastrillaje y bombardeos para desplazar a la población civil hacia los cascos urbanos. Luego los paramilitares

¹¹ El término ‘paras’ es utilizado frecuentemente en varias fuentes consultadas para denominar a los paramilitares colombianos. Con ese sentido y como sinónimo de paramilitares, utilizo esa expresión en el texto.

masacran a las comunidades que han permanecido en sus asentamientos poblacionales, obligando a los supervivientes a huir. Finalmente, los narcoterratenientes amplían sus propiedades con los terrenos abandonados y los repueblan con las familias de sus allegados y simpatizantes, estableciendo las Convivir para garantizar que su presencia no será perturbada por las guerrillas y que estas no contarán con bases de apoyo.¹³ El nexo con el paramilitarismo de las AUC es incuestionable: Salvatore Mancuso, uno de los actuales líderes de las AUC fue el principal jefe de las Convivir. Como analizara Gustavo Petro:

...en 1986 el 0,4 % de los propietarios de la tierra poseían el 32% de la superficie cultivable en Colombia, para el año 2000 el 0,4% de los propietarios controlaba ya el 62% de la superficie cultivable en un proceso bárbaro que dejó dos millones de desplazados campesinos.¹⁴

El comentario anterior resulta compatible con la historia del conflicto armado colombiano. La concentración de la tierra resultante de la violencia armada local o paraestatal ha estado presente en el siglo XIX, la guerra entre liberales y conservadores a inicios del siglo XX, la etapa de la ‘Violencia’ y ahora con el nuevo paramilitarismo. A los antiguos latifundistas se une una nueva oleada de dueños de la tierra, “antiguos narcotraficantes que adquieren propiedades y limpian su imagen, en muchos casos luego de expulsar mediante la violencia a los campesinos. Las fuerzas paramilitares cumplen aquí un papel importante”.¹⁵

Las autodefensas celebraron durante los años 90’ varias cumbres para coordinar sus operaciones. Estas reuniones comenzaron a celebrarse en 1994 (Cimitarra) y ya en 1996 con la III Cumbre Nacional de Autodefensas de Colombia, habían cobrado una conciencia de autonomía que les permitió convocar la Primera Conferencia Nacional de las Autodefensas el 18 de abril de 1997. En esa ocasión y bajo el auspicio de las ACCU, las autodefensas decidieron unirse en un solo movimiento nacional creando las

¹² Alfonso Torres Carrillo, “Paramilitarismo y crisis política en Colombia”, revista *Memoria*, no. 107, México, enero de 1998, en <http://www.memoria.com.mx/107/107mem03.htm>

¹³ Similar punto de vista sostiene el investigador colombiano Jaime Zuluaga Nieto en “¿Hacia la paz por medio de la guerra?”, *Síntesis 97. Anuario Social, Político y Económico de Colombia*, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, Santa Fe de Bogotá, mayo del 1997, p. 100.

¹⁴ Gustavo Petro, Ob. cit.

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La principal fuerza combatiente serían las ACCU (zona norte), complementándose con las Autodefensas de los Llanos Orientales (zona sur), las Autodefensas de Ramón Isaza y las Autodefensas de Puerto Boyacá (estos dos últimas operan en el Magdalena Medio).

Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)

Si bien la coordinación de la actividad paramilitar de ocho de los principales grupos de las autodefensas se comenzó a realizar a través de las AUC desde 1997, me parece más acertado hablar de la construcción de una identidad común de sus miembros a partir de 1998. En ese año, las AUC celebraron su Segunda Conferencia Nacional los días 16, 17 y 18 de mayo. Es en esta reunión que las AUC deciden reformar y complementar el Estatuto de Constitución y Régimen Disciplinario de las ACCU, adoptándolo como Régimen Estatutario Único de las AUC, lo que implica un grado de organización superior.

Las AUC se definen en el Artículo 1 de su Régimen Estatutario como una “organización nacional antsubversiva en armas y en el campo político un movimiento de resistencia civil que representa y defiende derechos e intereses nacionales desatendidos por el Estado”¹⁶. En ese sentido, las AUC reconocen que disputan el monopolio del ejercicio de la violencia al Estado (entendido este como un atributo consustancial a la soberanía del mismo), pero en pro de dicho Estado, pues esa violencia “no se expresará nunca (...) contra el régimen democrático”¹⁷ (Art. 2.9).

Si entendemos que las AUC consideran al estado colombiano como un “régimen democrático”, la pretensión de las AUC de ser considerado como un actor diferente al estado¹⁸ resulta inconsistente toda vez que al margen de la estrecha colaboración militar entre las fuerzas armadas y los paras, hay una coincidencia política e ideológica entre ambos. No en balde en el Artículo 2.4 de dicho documento se plasma que “la propiedad

¹⁵ Mariano Aguirre, “Desplazados en Colombia”, *Radio Nederland Wereldomroep*, 17 de abril de 2002, en http://www.rnw.nl/informarn/html/esp020401_refugiados10.html

¹⁶ *Régimen Estatutario Único de las Autodefensas Unidas de Colombia*, AUC, 18 de mayo de 1998, en <http://www.colombialibre.org/>

¹⁷ *Ibíd.*

privada es el fundamento esencial del sistema económico vigente”¹⁹. El derecho de resistencia es el que al ser ejercitado por intereses ideológicos contrarios al Estado configura a un actor como oponente al mismo y por tanto con una identidad propia.

Las AUC se plantean como principales misiones estratégicas “la unidad e integración nacional del movimiento antsubversivo”²⁰ (Art. 5.3) y “la destrucción o debilitamiento de las estructuras del enemigo y a la expansión, ampliación y consolidación de la Organización en los territorios desalojados por este”²¹ (Art. 5.5). Para esto último reservan un papel importante a su movimiento político ‘Colombia Libre’, que debe coordinar el trabajo con las autodefensas locales y las asociaciones campesinas (recuérdese el modelo de la ACDEGAM).

Lo que si parece ser cierto es que las AUC sostienen un proyecto de un sector importante de la política tradicional colombiana, en el que aspiran a insertarse o ser el eje. Salvatore Mancuso se reunió a mediados de noviembre de 2002, en el club El Nogal, con congresistas que representaban el 35 % de la membresía del Congreso. Estos congresistas son “respaldados mutuamente por los paramilitares, según las palabras de Mancuso el 10 de marzo del 2002”²², día de las elecciones a la Cámara y el Senado.

En la mencionada reunión, Mancuso solicitó a los congresistas “su apoyo para encontrar una fórmula jurídica de perdón para sus delitos que no exigiera reconocerles un status político”²³ a él y a Carlos Castaño. Desde luego, de concretarse una propuesta de semejante naturaleza, la mayoría de los miembros de las AUC saldrían indemnes políticamente y listos para reagruparse en torno a un proyecto legal con capacidad para proyectarse en la lucha electoral. Esa desmovilización con impunidad de los paras, relegitaría al estado colombiano como interlocutor interesado en solucionar pacíficamente el conflicto y habilitaría a las AUC para presentar su proyectada Alianza por la Unidad de Colombia-AUC. Siendo las AUC articuladora de varios intereses económicos (ganaderos, terratenientes, narcoterratenientes y empresarios), su nueva

¹⁸ *Origen, evolución y proyección de las autodefensas Unidas de Colombia*, AUC, marzo de 1999, en <http://www.colombialibre.org/>

¹⁹ *Régimen Estatutario Único de las Autodefensas Unidas de Colombia*, AUC, 18 de mayo de 1998, en <http://www.colombialibre.org/>

²⁰ *Ibíd.*

²¹ *Ibíd.*

²² Dick Emanuelson, Una pequeña historia sobre paramilitares y el Club El Nogal, *Rebelión*, 12 de marzo de 2003, en <http://www.rebelion.org/plancolombia/120303dick.htm>

imagen beneficiaría a aquellos que desde las sombras le han financiado e incluso podría resultar atractivo para sectores del bipartidismo tradicional que tienen amplias coincidencias con el ultraderechismo de las AUC y están conscientes del desgaste político que padecen tanto el Partido Liberal como el Partido Conservador tras tantos años de alternancia en el poder.

El enorme respaldo que reciben las AUC por parte de influyentes sectores colombianos y norteamericanos, quedó al desnudo en octubre de 2001. Un operativo de la Fiscalía en el exclusivo sector del Lago Calima (departamento del Valle) reveló cuantiosa información sobre las transacciones bancarias de esta organización. Las operaciones de lavado de dinero procedente de operaciones de narcotráfico, extorsiones y donativos, se realizaban a través del Barnett Bank, con sede en 13 780 SW 88 TH Street en Miami, Florida. Los beneficiarios que recibían el dinero para su posterior lavado y enmascaramiento en cuentas que luego utilizaban las AUC para financiar sus actividades eran compañías norteamericanas. “Nombres como American Savings, US Water Polo Inc., Park Place, Sears, Southern Bell, Adelphia Cable, hacen parte de la lista de receptores de los giros”.²⁴ Este dinero proviene en parte, según el listado descubierto, de empresas asentadas en Cali que financiaban voluntariamente o por extorsión a las AUC: firmas de bienes raíces, seguros, comunicaciones, servicios de salud, hoteles, restaurantes y otros. La otra gran fuente emana de sus viejos aliados. “La contabilidad descubierta a los paras revela lo que le piden a cientos de hacendados por ‘cuidar’ cerca de 600 mil hectáreas de las mejores tierras de cultivos y ganado del país”²⁵, en los departamentos de Bolívar, Córdoba, César, Magdalena, Santander y Norte de Santander.

La transnacionalización²⁶ del paramilitarismo colombiano

²³ Dick Emanuelson, Ob. cit.

²⁴ Ibídem, *El Tiempo*, 14 de octubre de 2001.

²⁵ Ibídem.

²⁶ Utilizo la expresión ‘transnacionalización’ no en un sentido económico, desechando la posibilidad de hacer uso de los términos ‘regional’ o ‘subregional’. Ello tiene una explicación lógica: no es meramente subregional, porque en efecto Colombia pertenece a la subregión andina, pero el paramilitarismo colombiano no tiene vínculos conocidos con Bolivia y en el caso del Perú, si existiesen, deben ser de poca o escasa importancia. Igual lógica es la que sostengo para no utilizar el término regional. Aunque los casos presentados son los de Ecuador, Panamá y Venezuela, los vínculos de los paras colombianos incluyen conexiones con Norteamérica (Estados Unidos y Canadá), el Gran Caribe y Europa (Reino Unido). En ese sentido es que hace uso del término el investigador Fernando Cubides, de la Universidad Nacional de Colombia, cuando habla de “*las redes transnacionales que se han ido construyendo en uno y otro sentido*”

Las AUC tienen varios frentes de guerra que colindan con las fronteras de Panamá y Ecuador, incorporando en años recientes algunas unidades cerca del territorio venezolano. Abordar el tema, implica comentar cada uno de estos casos por separado, pues en esencia tienen su tracto particular.

Ecuador

El caso de Ecuador resulta interesante por sus implicaciones. En el período de 1995-1999, estudios de organizaciones ecuatorianas de derechos humanos cifraban en 12 700 los desplazados colombianos en ese país.²⁷ Para el final del 2001, 4 300 estaban bajo el estatuto de refugiado o estaban en trámites de asilo, pero adicionalmente otros 30 000 colombianos se encontraban desplazados en el Ecuador.²⁸ Tras los desplazados y las líneas de abastecimiento de las FARC,²⁹ han penetrado los paramilitares realizando extorsiones en zonas del norte ecuatoriano, lo que representa una nueva fuente de ingresos para el Bloque Sur de las AUC.

Los paras han encontrado en este país andino-amazónico un terreno fértil para su proselitismo contrainsurgente. Primeramente, el actual gobierno del presidente Lucio Gutiérrez designó como Comandante General de la policía al General Edgar Gonzalo Vaca Vinuesa, con antecedentes como torturador cuando dirigía el Servicio de Investigación Criminal 10.³⁰ A esto se unen recientes imputaciones contra este alto oficial, por haber mantenido relaciones con traficantes de armas y las mafias ecuatorianas y argentinas.

Otro punto que ayuda al establecimiento de las AUC en Ecuador es la existencia desde el 2001 de un grupo paramilitar autodenominado Legión Blanca. En su denuncia sobre las amenazas de este grupo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos del Ecuador,

de la guerra irregular". Fernando Cubides, "Flujos y reflujos del paramilitarismo", *Síntesis 2000. Anuario Social, Político y Económico de Colombia*, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, Santa Fe de Bogotá, febrero de 2000, p. 59.

²⁷ Pablo De la Vega, *La regionalización del conflicto colombiano y sus consecuencias en los derechos humanos en las zonas de frontera*, Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S. J.", Quito, 17 de diciembre del 2000 (mimeo).

²⁸ Richard L. Millett, *Colombia's conflicts: the spillover effects of a wider war*, Strategic Studies Institute of the U.S. Army War College, Carlisle –PA, October 2002, p. 16.

²⁹ Judith A. Gentleman, *The regional security crisis in the Andes: patterns of State response*, Strategic Studies Institute of the U.S. Army War College, Carlisle–PA, July 2001, p. 18.

³⁰ El Servicio de Investigación Criminal 10 (SIC-10), funcionó como grupo de exterminio antisubversivo contra el grupo guerrillero Alfaro Vive, durante el gobierno de León Febres Cordero (1984-1988).

responsabilizó como los cerebros de este grupo a altos oficiales en activo dentro de las fuerzas armadas ecuatorianas: el General Carlos Vasco Cevallos (Director de inteligencia del Comando Conjunto de las fuerzas armadas), el General Roberto Moya Arellano (Jefe del Estado Mayor) y el Coronel Mario Pazmiño Silva (Comandante de la Compañía de Contrainteligencia Quito).

No es descartable que este grupo tenga vínculos con las fuerzas armadas colombianas y las AUC. En su comunicado del 15 de febrero de 2003, la Legión Blanca solicitó al presidente Gutiérrez que “atienda el frente externo y se integre a la lucha contra la guerrilla colombiana”,³¹ lo que complacería un viejo anhelo norteamericano: la intervención de una fuerza multinacional de los países amazónicos que legitimaría una participación más activa de los Estados Unidos en el conflicto colombiano. Posteriormente, los legionarios acusaron a dirigentes indígenas y campesinos de prestar ayuda a las FARC y al Ejército de Liberación Nacional (ELN), calificando de guerrilleros a los desplazados colombianos asentados en el norte ecuatoriano y solicitando su expulsión (lo que de concretarse, equivale a una muerte casi segura en manos de las AUC). Además, amenazaron con convertir en blanco de sus ataques a personas, organizaciones e instituciones ecuatorianas que en su opinión colaboran con las guerrillas colombianas, lo que rememora el asesinato del diputado y dirigente de izquierda ecuatoriano Jaime Hurtado en 1999, cometido por las AUC como represalia por haber sido invitado por las FARC-EP para participar en las ceremonias que se celebrarían en la zona de despeje de San Vicente del Caguán. Finalmente en su comunicado, la Legión Blanca saluda al presidente Álvaro Uribe por su política belicista, anunciándole: “en Ecuador tiene hermanos que evitarán que aquellos terroristas (se refieren así a las guerrillas colombianas) encuentren refugio en este país. Nosotros los atacaremos”.³²

Panamá

En el caso panameño, el territorio de este país resulta el más vulnerable de los países vecinos de Colombia, pues carece de fuerzas armadas y su Guardia Nacional no tiene el poder de fuego y la preparación necesaria para enfrentar exitosamente las incursiones de

³¹ *Comunicado de la Legión Blanca*, Ecuador, Legión Blanca, 15 de febrero de 2003, en <http://www.derechos.org/nizkor/ecuador/doc/legbca1.html>

³² *Ibídem*.

las AUC. Por otra parte, no existen rutas de acceso por tierra hacia las zonas más distantes de las selvas de Darién.

Los paramilitares justifican sus incursiones en territorio panameño bajo el pretexto de atacar campamentos de descanso de las FARC. “In 1997 reports surfaced that paramilitary commanders were offering \$ 2 000 for each guerrilla killed in Panama.”³³ Sin embargo, a mi juicio otros pudieran ser los motivos reales de los ataques paramilitares en el territorio del país istmeño.

En 1997, el General colombiano Rito Alejo del Río desplegó una operación de exterminio contra las poblaciones negras e indígenas fronterizas con Panamá. La operación Génesis destruyó mediante bombardeos a poblaciones como Bijao, cerca del río Atrato. Y es que por esa zona deberá pasar un tramo de la Carretera Panamericana, lo que permitirá un mayor flujo de mercancías, favoreciendo así el proyecto del ALCA en los términos de lo que se conoce como integración física. Si el ejército bombardeó, las AUC se encargaron de ejecutar las labores de limpieza. “El proyecto es claro: sacar a los campesinos de sus fincas (...), despojar a las comunidades negras de sus tierras ancestrales (...) y apropiarse de los resguardos indígenas de kunas y emberás, para, hechas las grandes haciendas, aprovecharse de la valorización de la propiedad que traerá aparejada la destrucción del Tapón del Darién”.³⁴

Las AUC penetraron este año en la zona del Darién, asesinando a cuatro autoridades indígenas de la etnia Kuna, ahuyentando al resto de los pobladores y secuestrando a dos ciudadanos norteamericanos y un canadiense que trabajaban para el Discovery Channel. El ataque sorpresivo y posterior saqueo a las aldeas fronterizas de Paya y Púcuro, sucedió el 18 de enero de este año.³⁵

Para los paramilitares colombianos mantener su presencia en esta zona implica tener una ruta segura para recibir pertrechos bélicos. En abril de 2002, las AUC recibieron por vía marítima un cargamento de 3 000 AK-47 y cinco millones de proyectiles que habían comprado a traficantes de armas israelíes residentes en Guatemala. Por otra parte, existen

³³ Richard L. Millett, Ob. cit., p. 18. “En 1997 reportes revelaron que los comandantes paramilitares habían ofrecido 2 000 dólares por cada guerrillero muerto en Panamá” (traducción del autor).

³⁴ Alfredo Molano Bravo, *El exterminio de los indígenas Kunas es parte del proyecto de contrarreforma agraria comenzado por el Gral. Rito Alejo*, Bogotá, 26 de enero de 2003, en <http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/kuna4.html>.

noticias de que las AUC han estado formando y entrenando unidades paramilitares panameñas en la zona de Colón, para que les ayuden a combatir a las guerrillas colombianas.³⁶

Venezuela

Venezuela no ha sido un caso aparte en las acciones del paramilitarismo colombiano y sus potenciales amenazas. Pero resultaría muy útil hablar de los problemáticos y en ocasiones confusos antecedentes de las interacciones militares en la frontera de ambos países para comprender su estado actual.

Durante varios años las fuerzas armadas venezolanas y colombianas mantuvieron latente la posibilidad de un conflicto entre ambas, por las disputas fronterizas en el Golfo de Venezuela. Sin embargo, en la administración de Rafael Caldera (1994-1999), los militares colombianos comenzaron a ver a sus homólogos venezolanos no tanto como una amenaza y si como aliados en su guerra contra las guerrillas colombianas. “The armed forces of both nations attempted to improve communications and, to the extent possible, coordinate their actions.”³⁷ Esto en la práctica determinó que ambas fuerzas armadas realizaran de manera conjunta, operativos contra la insurgencia colombiana, para lo cual las fuerzas armadas venezolanas incrementaron sus efectivos en el estado de Apure, de 1 500 a 5 000 soldados. Incluso, oficiales venezolanos amparaban a los paras colombianos en las poblaciones de Amparo y La Victoria, desde las cuales operaban cómodamente en contra de las poblaciones colombianas en el departamento de Arauca.

Con la llegada al poder del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, el nuevo gobierno venezolano tomó distancia del conflicto colombiano. Chávez se presentó como un acérrimo crítico de la aplicación del Plan Colombia y expresó su deseo de no involucrar a Venezuela en un conflicto ajeno (salvo como mediador entre los contendientes). Parecía que los embates de la guerra colombiana cesarían para Venezuela. Pero los paramilitares de las AUC no lo entendieron así y comenzaron a realizar una serie de acusaciones contra el gobierno venezolano, atribuyéndole cierta complicidad con las guerrillas de las FARC

³⁵ Nizkor: *Los paramilitares de las ACU asesinan a varios caciques Kuna en un poblado panameño*, en <http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/kuna1.html>.

³⁶ Richard L. Millett, Ob. cit., p. 20.

y del ELN,³⁸ aspecto este que ha sido varias veces refutado por Caracas.³⁹ Más aún, las AUC comenzaron a fomentar la creación de grupos paramilitares venezolanos para ayudar a los ganaderos de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga) a “enfrentar a las guerrillas del vecino país (...) y las invasiones de tierra”⁴⁰ por parte de los campesinos venezolanos.

Durante el 2002, Carlos Castaño volvió a anunciar el envío de instructores para entrenar paramilitares venezolanos. Y en el 2003 los paras aumentaron su escalada agresiva contra Venezuela, realizando ataques contra el territorio de dicho país (río de Oro y Filo Don Julio, Estado de Zulia) el miércoles 19 de marzo.⁴¹ Esto ha provocado que Venezuela despliegue cerca de 20 000 soldados en la frontera común de 2 219 kilómetros.

Aunque la misión de las fuerzas armadas venezolanas enviadas a la frontera, es impedir la penetración al territorio venezolano de cualquier grupo armado procedente de Colombia (independientemente de su signo ideológico), a contrapelo del deseo del mandatario venezolano, pudieran estarse reeditando acciones de naturaleza contrainsurgente en vinculación con las fuerzas armadas colombianas. De hecho, el Frente de Guerra Oriental del ELN, ha acusado a las tropas del Teatro de Operaciones # 1 (Apure) de haber emprendido un operativo conjunto con la Brigada # 18 del Ejército Colombiano (Arauca), bajo el nombre clave de “Comando Cobra”, entre los días 28 de febrero y 10 de marzo del presente año.⁴² Aunque esto no ha sido confirmado por el autor, fuentes venezolanas no le restaron credibilidad a la denuncia y le aseguraron que al menos existían vínculos entre los paramilitares de las AUC y la Guardia Nacional venezolana, entre cuyas funciones se encuentra la custodia de las fronteras.

³⁷ Richard L. Millett, Ob. cit., p. 6. “Las fuerzas armadas de ambos países procuraron mejorar sus comunicaciones y, en la medida de lo posible, coordinar sus acciones” (traducción del autor).

³⁸ Beatriz Gómez, *Hugo Chávez: Blanco de los paramilitares colombianos. Entrevista exclusiva de la BBC a Carlos Castaño*, sin fecha, en http://www.geocities.com/shinallatak/cartas_al_libertador2.htm

³⁹ Ver “Quieren asociar guerrilla con el gobierno”, Venezuela, 30 de marzo de 2003, en <http://www.unionradio.com.ve/noticis/nacionales/Notanac2003032914994.htm> y ADITAL, Venezolanos repudian declaraciones de paramilitares colombianos, Caracas, 15 de abril de 2003, en <http://www.adital.org.br/asp2/noticia.asp?idioma=ES¬icia=6697>

⁴⁰ Paramilitares venezolanos asesoran a venezolanos, *El Nuevo Herald*, Miami, 7 de abril de 2001, en <http://www.rose-hulman.edu/~delacova/colombia/asesoran.htm>

⁴¹ Roberto Ramírez, “Paramilitares colombianos dispararon morteros contra territorio venezolano en río de Oro”, en <http://colombia.indymedia.org/news/2003/03/2198.php>

El paramilitarismo y la negociación de su impunidad

La futura impunidad de los paras es una cuestión que debemos retomar desde la época del gobierno del presidente Andrés Pastrana. Para empezar, se aprecia un detalle que pasaría inadvertido. En el texto del Plan Colombia, se presenta a los paramilitares como un 3er actor independiente del estado y susceptible de participar en una negociación para ser desmovilizados. Textualmente se plantea que “existen los grupos de autodefensa al margen de la ley, quienes buscan una solución armada al conflicto guerrillero, y un reconocimiento político mayor para su organización”.⁴³ Resalté frases del texto pues resulta llamativo que la expresión “paramilitares” no fue utilizada en su redacción siendo utilizada, como sinónimo de “grupos de autodefensa al margen de la ley”, la expresión “grupos armados”; el otro punto de obligada mención es, que se le confiere expresamente un “reconocimiento político” precedente a los paramilitares, pues el que intentan obtener sería “mayor”; y por si quedaban dudas de la coincidencia de identidad entre el estado colombiano y los paramilitares, se les atribuye a los últimos la “búsqueda de una solución armada al conflicto guerrillero”, algo que han intentado conseguir sin éxito los sucesivos gobiernos desde la época de la Violencia a través de las fuerzas armadas de ese país. En otra parte del documento, se señala que el gobierno los combate, “pero este hecho no significa que no esté, dispuesto a buscar alternativas y maneras pacíficas para dismantelar su infraestructura”,⁴⁴ lo que se traduce en que el gobierno colombiano buscaba desde antes de 1999 cómo reinsertar a los paramilitares a la vida pública. No se puede olvidar que el desacuerdo de las FARC-EP y la UC-ELN, frustró el intento gubernamental de crear una plataforma negociadora con las AUC a través del Acuerdo del nudo de Paramillo. Este acuerdo, suscrito entre Carlos Castaño, el Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo, es la génesis de las actuales negociaciones de paz entre las AUC y el gobierno.

¿Cuál es la reacción de los paramilitares frente al Plan Colombia? Según Carlos Castaño, “*el Plan Colombia es importantísimo tanto en el componente militar norteamericano —y social, en parte— como en el componente netamente social, por parte de la Unión*

⁴² “Ejército colombiano atropella a venezolanos en el Estado de Apure”, ELN, Frente de Guerra Oriental, 31 de marzo de 2003, en http://www.eln-voces.com/actualist/regiones/arauca/denuncia_frontera.pdf

⁴³ *Plan Colombia*, Presidencia de la República de Colombia, en <http://usinfo.state.gov/español/colombia/plan.htm>

Europea".⁴⁵ Las simpatías expresadas por Castaño son coherentes con las acciones de las AUC en el departamento de Putumayo, donde sus fuerzas son la vanguardia funcional al Plan Colombia. Según Comando Wilson, comandante militar del Frente "José Jaime Soto" de las AUC, las fuerzas de la XXIV Brigada del Ejército y la Brigada Antinarcóticos, fumigan las zonas previamente aseguradas por los paramilitares. "El Plan Colombia sería casi imposible sin la ayuda de las fuerzas paramilitares. Si no tomamos el control de las zonas antes que el ejército, las guerrillas derribarían sus aviones".⁴⁶

Esta participación de los paras en la aplicación del Plan Colombia pudiera parecer contradictoria, luego de la inclusión de las AUC en la lista de organizaciones terroristas actualizado por el Departamento de Estado norteamericano tras los sucesos de septiembre de 2001 en Nueva York. Incluso el Departamento de Justicia estadounidense coordinó junto a autoridades costarricenses la operación Terror Blanco, en el que agentes federales filmaron reuniones secretas en Londres, Islas Vírgenes y Panamá que posibilitaron el arresto en San José de dos paramilitares de las AUC y la incautación de material bélico de contrabando para esa organización. El cargamento confiscado, valorado en 25 millones de dólares, sería pagado en cocaína y efectivo e incluía "9000 fusiles AK-47, lanzagranadas y casi 300 000 granadas; 300 pistolas; lanzamisiles personales; y unos 53 millones de municiones".⁴⁷

Pero la actitud norteamericana pudiera ser entendida en el marco de la ahora necesaria disolución de las AUC como estructura paramilitar (nótese que no hablo de abandonar el paramilitarismo como forma de hacer la guerra). Esa sería la única variante que permitiría enmascarar la grave responsabilidad del estado colombiano y de su principal aliado, los Estados Unidos, en la guerra sucia que han librado aplicando métodos cruentos contra la población civil. El nuevo Código Penal colombiano, la Ley 599 del 24 de julio de 2001, no tipifica al paramilitarismo como conducta punible. A estos "grupos armados al margen

⁴⁴ Ibídem.

⁴⁵ Beatriz Gómez, Ob. cit.

⁴⁶ Pascual Serrano, "Los paramilitares colombianos reconocen que operan en coordinación con las fuerzas del Plan Colombia", *Rebelión*, 17 de mayo de 2001, en <http://www.rebelion.org/plancolombia/param170501.htm>

⁴⁷ "Secretaría de Justicia de EE.UU. anuncia arrestos en caso de armas de paramilitares colombianos", TERRA, Panamá, 3 de junio de 2003, en <http://www.terra.com.pa/noticias/articulo/html/act112948.htm>.

de la ley se les procesaría por concierto para delinquir”,⁴⁸ lo que equivale a disminuir considerablemente el marco sancionador aplicable a los civiles y militares, cuyas sanciones serían más altas por haber cometido delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

El gobierno de Álvaro Uribe ha realizado no pocos esfuerzos para legalizar la impunidad del paramilitarismo. Poco tiempo después de tomar posesión como Jefe de Estado el 7 de agosto de 2002, su gobierno aprobó en noviembre la Ley 782, modificatoria de la Ley 418 de 1997, con lo que “suprimió la exigencia del carácter político de las organizaciones armadas al margen de la ley”⁴⁹ para poder negociar acuerdos de desmovilización. El 22 de enero de 2003, fue expedido el Decreto 1128 con el propósito de conceder amnistías e indultos a aquellos que quisieran incorporarse a la legalidad. Finalmente, en mayo del presente año, Uribe anunció que presentaría un proyecto de ley “*para darles ‘libertad condicional’ a los miembros de los grupos ilegales responsables de delitos atroces*”.⁵⁰

Uribe tiene razones para ser generosos con las AUC. En las zonas bajo su control, los paramilitares “presionaron a la población para votar por él”.⁵¹ Y es que desde su época de alcalde en Medellín a finales de los 70’ hasta su puesto de gobernador del departamento de Antioquia en los 90’, Alvaro Uribe Vélez mantuvo estrechos vínculos con los paramilitares. Esa relación ha facilitado las cosas extraordinariamente para las AUC. En noviembre de 2002 decretaron un cese al fuego unilateral y comenzaron a dialogar con los políticos uribistas para encontrar una fórmula jurídica que les permitiera su retorno a la legalidad.

Como consecuencia de las conversaciones, el 15 de julio de 2003, el gobierno colombiano y las AUC, con la presencia de la Comisión Exploratoria de Paz y de facilitadores de la Iglesia Católica, llegaron a concretar un acuerdo marco para negociar la desmovilización de los miembros de ese ente paramilitar antes del 31 de diciembre de

⁴⁸ Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, “¿Terrorismo o Rebelión? Propuestas de regulación del conflicto armado”, Santa Fe de Bogotá, febrero de 2002, en <http://www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/dih/>

⁴⁹ Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia, “Las víctimas del paramilitarismo exigen verdad, justicia y reparación integral”, Santa Fe de Bogotá, 5 de febrero de 2003, en <http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/cpdh1.html>

⁵⁰ “Jefe paramilitar Carlos Castaño pide salvoconductos para él, Salvatore Mancuso y Luis Eduardo Cifuentes”, El Tiempo, Santa Fe de Bogotá, 2 de junio de 2003, en http://colombia-libre.org/colombialibre/primer_plano.asp?id=3133.

⁵¹ Gustavo Petro, Ob. cit.

2005. Un análisis abreviado de los diez puntos que componen el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, revela algunos detalles interesantes. En el primer punto se define como objetivo central de este proceso “el logro de la paz nacional, a través del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el restablecimiento del monopolio de la fuerza en manos del Estado”.⁵² Entiéndase como fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, el fortalecimiento del gobierno de Uribe Vélez en su opción militar contra las guerrillas. Semejante acuerdo mejoraría su imagen internacional como un interlocutor exitoso en negociaciones de paz y eliminaría la principal barrera en los diálogos con el movimiento insurgente, trasladando a los grupos guerrilleros la responsabilidad de negociar la paz o seguir el conflicto armado, lo cual legitimaría nuevas medidas de fuerza por parte de Uribe. Por eso es esencial que las AUC dejen de compartir el monopolio de la fuerza con el ejército colombiano, pues las fuerzas armadas sí estarían autorizadas legalmente a utilizar la fuerza contra los rebeldes si estos no pactaran la paz en las nuevas condiciones. En ese sentido la exhortación que a la comunidad internacional se hace en el décimo punto del acuerdo, para que preste “su concurso para desactivar los factores de violencia que afectan a Colombia”⁵³ y fortalezca su democracia, se convierte en una manera solapada de solicitar la contribución a otros países para que sustenten la guerra antisubversiva del estado colombiano.

Cumpliendo con el segundo punto del acuerdo entre las AUC y el gobierno, donde “el gobierno se compromete a adelantar las acciones necesarias para reincorporarlos a la vida civil”,⁵⁴ el Ministro de Interior y de Justicia Fernando Londoño Hoyos, presentó el pasado 21 de agosto el Proyecto de Ley Estatutaria, “por la cual se dictan disposiciones en procura de la reincorporación de miembros de grupos armados que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional” que complementarían los esfuerzos de otorgar impunidad a los paramilitares por sus crímenes. Este proyecto de ley es el anunciado por Uribe en mayo del presente año y sería aplicable solo a aquellos contra los cuales se hubiera dictado una sentencia privativa de libertad o que se acogieran a una sentencia anticipada previa declaración de sus delitos.

⁵² Acuerdo de Santa Fé de Ralito para contribuir a la paz de Colombia, AUC-Gobierno Nacional de Colombia, 15 de julio de 2003, en <http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/paz/ralito.html>

⁵³ *Ibíd.*

⁵⁴ *Ibíd.*

Si bien es cierto que la amnistía y el indulto son admisibles en derecho cuando se pretende la consecución de la paz, también es necesario recordar que su aplicación es inadmisiblemente ética y jurídicamente, en los casos de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Por lo tanto, la suspensión condicional de la ejecución de una sentencia penal por decisión judicial tal y como lo prevé el Artículo 2 de esa norma, en el caso de un paramilitar que haya cometido semejantes delitos, carece de validez jurídica. Resulta una burla a los familiares de las víctimas del paramilitarismo, que en el parágrafo 3 de ese artículo, se establezca un ‘período de prueba’ de uno a cinco años para controlar los requisitos de buena conducta que se exigen en el Artículo 3, entre los cuales se encuentra una ‘reparación simbólica’ por el daño inferido. Transcurridos los cinco años, el juez de ejecución de sentencia estaría facultado para otorgarle la libertad definitiva a un paramilitar si su informe de buena conducta fuera aprobado por la Comisión de Verificación encargada de su supervisión. Es decir, la sanción principal de privación de libertad, sería sustituida por una sanción subsidiaria de trabajo correccional sin internamiento, con la sanción accesoria de estar inhabilitado por diez años para ejercer funciones públicas o acceder a cargos de elección popular, esto último tal y como lo estipulan los Artículos 11, 12 y 13 del mencionado proyecto de norma jurídica. Es tan aberrante la idea, que la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han hecho llegar sus críticas al gobierno colombiano, pues semejante ley violaría el Artículo 17.2 de los Estatutos de la Corte Penal Internacional, que prohíbe la elaboración de una norma jurídica si su propósito es sustraer a una persona de su responsabilidad penal por crímenes que son de la competencia de la CPI. Incluso un prominente miembro del Congreso que apoyó activamente la campaña presidencial de Uribe, el senador derechista Rafael Pardo del Partido Liberal, ha deplorado este proyecto al calificarlo de eufemismo, ya que “es decirle a la gente que quienes cometieron delitos como el terrorismo, narcotráfico y genocidio no van a ir a la cárcel”.⁵⁵

Esas negociaciones se han convertido de máxima prioridad para los líderes históricos de las AUC, al punto que no admiten disensos sobre el tema en su estructura de mando. Tal es así que el comandante Rodrigo o ‘Doble Cero’ jefe del Bloque Metro de las AUC,

⁵⁵ Yadira Ferrer, “Se abre debate sobre impunidad”, *IPS*, Santa Fe de Bogotá, 29 de agosto de 2003.

acusó a Castaño y a Mancuso de haberlo amenazado con “desatar una guerra total contra su grupo si este no aceptaba sentarse a conversar con el Ejecutivo”.⁵⁶ De hecho en agosto del presente año varios bloques de las AUC, especialmente el Cacique Nutibara y el Centauros, desarrollaron una ofensiva militar contra los paramilitares que se resistían a negociar con el gobierno, aniquilando o reincorporando a parte de los miembros de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC) y del Bloque Metro. Incluso este último grupo envió una comunicación a Uribe, solicitándole negociar su salida del conflicto. Esta forma de actuar de las AUC, estaría relacionada con el hecho de que “Castaño parece haber aprendido que debe evitar a toda costa la disgregación o las salidas meramente individuales, y que el poder de fuego tiende a convertirse en poder político o al menos en algún grado de favorabilidad jurídica”.⁵⁷

Conclusiones

El paramilitarismo aún cuando desaparezca la estructura de las AUC seguirá sobreviviendo en los ejércitos privados de los narcoterratenientes (las actuales Convivir) y en el ejército de soldados campesinos y el millón de informantes que Uribe propone para derrotar militarmente a las guerrillas. Para personas acostumbradas a vivir de la guerra, no resulta fácil incorporarse a la vida pacífica. Si tomamos en cuenta que muchos de los soldados rasos del ejército paramilitar nunca serán identificados por víctimas o ex compañeros, por temor a represalias, entonces tampoco serían procesados de acuerdo a la ley estatutaria que se ventila en el Congreso. De ser así tendrían entonces la vía expedita para incorporarse a los batallones campesinos y transmitir toda la experiencia que poseen en materia de lucha irregular contra los grupos guerrilleros. No sería una hipótesis descartable que algunas fracciones disidentes de las AUC, después de haber alcanzado cierto grado de autonomía, persistan en mantenerse sobre las armas reeditando un fenómeno similar al de los ‘recontras’ en Nicaragua.

En una perspectiva nacional, los jefes de las AUC, punta del iceberg paramilitar, pudieran ser procesados judicialmente y condenados a sanciones poco severas. Resultaría

⁵⁶ “*Los paramilitares se pelean entre sí*”, AmericaEconomica.com, 28 de mayo de 2003, en <http://www.americaeconomica.com/numeros4/214/noticias/mraucilitignoma.htm>

embarazoso extraditarlos, aunque si esto fuera necesario para la relegitimación de la elite colombiana en el poder y su relación con los Estados Unidos, esto pudiera suceder. Quizás previendo esto Mancuso y Castaño han solicitado al Departamento de Estado norteamericano que envíe una comisión a Colombia para aclarar los casos de los comandantes paramilitares sobre los cuales pesa el pedido de extradición. Por otra parte, el vinculo de esta organización con el sistema político, tiende a tener expresiones concretas como articulador de un partido que unifique los intereses de sectores convergentes procedentes de los partidos liberal y conservador, tipo MORENA.

En el ángulo externo, la impronta paramilitar se mantendrá a través de la formación y colaboración con sus homólogos en países vecinos, lo que permitiría: hostigar a críticos del Plan Colombia y de la presencia militar norteamericana en el área (caso de Ecuador); sortear los dilemas legales de tipo medioambiental y étnico que plantearían la destrucción de extensas áreas de selva virgen para favorecer el ALCA (caso de Panamá); y por último, se convertirían en un factor adicional de tensión y desgaste para gobiernos de corte popular (caso de Venezuela). Coincido con Fernando Cubides, cuando reflexiona que “estos grupos han desarrollado poder, estructura organizativa y redes de apoyo sólidas, que no van a desaparecer por sí mismas, ni aún en el más favorable de los escenarios: el de un proceso de paz en marcha en el que se hayan resuelto y pactado todos los demás puntos de la agenda”.⁵⁸ Ese poder y esas estructuras organizativas pueden ser de mucha utilidad, para los sectores más reaccionarios de los países vecinos, ante actuales o potenciales conflictos con sujetos colectivos que traten de realizar transformaciones populares y democráticas en pro de las mayorías.

⁵⁷ Fernando Cubides, “Flujos y reflujos del paramilitarismo”, *Síntesis 2000. Anuario Social, Político y Económico de Colombia*, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, Santa Fe de Bogotá, febrero de 2000, p. 62.

⁵⁸ Fernando Cubides, Ob. cit., p. 61.